ANAVERSA. Una lección desperdiciada

**Lilia América Albert**

**La Jornada Veracruz, Mayo 5, 2014**

Este sábado 3 se cumplieron 23 años de que la formuladora de plaguicidas Anaversa explotó y se incendió en Córdoba; un gravísimo accidente químico que ha sido catalogado como el peor de este tipo ocurrido en México. Hubo varias causas para esta explosión; en primer lugar, el descuido y omisiones de los propietarios pero, también, la corrupción en algunas esferas y la falta local de preparación para prevenir y enfrentar las emergencias químicas.

En cuanto a la corrupción, sólo así se puede entender que, en el momento de la explosión, la empresa contara con licencias vigentes de ambiente y salud, renovadas poco antes por las autoridades federales, a pesar de las múltiples fallas operativas y deficiencias de seguridad que el incendio puso en evidencia.

Lamentablemente, salvo los afectados que no han fallecido, pocos recuerdan que un tercio de la ciudad fue cubierto por humos tóxicos, que las peligrosísimas dioxinas generadas durante el incendio llegaron a varios arroyos, contaminándolos y afectando los pozos que eran fuentes de agua de muchas familias. También se ha olvidado que, no sabiendo que hacer con los muy contaminados escombros del incendio, las autoridades los mandaron tirar al basurero de Fortín, en donde estuvieron hasta que, en teoría, se mandaron al confinamiento de Mina, N.L., en donde no hay constancia de que hayan llegado.

Ninguna autoridad parece querer recordar que la historia del manejo y control de la emergencia es un catálogo de lo que por ningún motivo debe ocurrir en estos casos: los bomberos ignoraban cuáles eran las actividades de la planta, qué sustancias se formulaban y almacenaban ahí y cómo combatir este tipo de incendios; tampoco tenían equipos de protección personal adecuados. Por la falta de control durante el combate del incendio, muchas personas estuvieron dentro de la planta, supuestamente ‘*ayudando’* pero, en realidad, poniéndose en riesgo y estorbando. Cuando se puso en operación el Plan DN-III, los soldados recibieron órdenes de permanecer rodeando el inmueble, lo que hicieron por más de 24 horas, demostrando así, que tampoco en el ejército se sabía lo que es una emergencia química, cuáles son sus riesgos y cuál es la forma correcta de enfrentarlas sin exponer a sus integrantes.

Los responsables de los servicios de urgencia carecían de información específica sobre los tóxicos que había en la planta y los que se podían generar a causa del incendio; por lo tanto, no supieron cómo tratar a los intoxicados y, mientras la hubo, les aplicaron atropina sin más trámites, ignorando que no todos los intoxicados lo fueron por plaguicidas organofosforados, -que son los que requieren atropina para el tratamiento de urgencia-, ya que en la planta también había otras clases de plaguicidas.

Al no haberse llevado un registro, no fue posible atender a todos los que estuvieron expuestos durante la explosión e inmediatamente después de ella, los que no sólo fueron los vecinos del barrio, sino los bomberos, los soldados, los curiosos y hasta a quienes lavaron la ropa de los expuestos. A pesar de que los escurrimientos y desagües de la planta –algunos, clandestinos- iban hacia varios arroyos cercanos, los pozos que dependen de ellos sólo se clausuraron temporalmente, por lo que quienes viven cerca de esos arroyos, o consumen agua de dichos pozos han seguido expuestos todos estos años. No se puede olvidar que también estuvo expuesta la población de Fortín, en cuyo basurero municipal se volvieron a incendiar los escombros del accidente.

Al no contar con información de ningún tipo sobre cuáles sustancias se generaron a causa del incendio y en qué cantidades, no se supo cuáles efectos podría haber y cuáles serían los más importantes; por lo tanto, las pocas acciones de salud respondieron a un esquema general, poco útil en casos como éste en que la gran mayoría de los efectos que se pueden predecir, por ejemplo: disfunción inmunitaria, tumores malignos, malformaciones congénitas y fallas reproductivas, sólo son evidentes a largo plazo o en la descendencia de los expuestos.

Desde luego, tampoco se ha llevado un control de los casos de cáncer y malformaciones que han ido apareciendo en la población expuesta en los años posteriores ni hubo un registro de los abortos espontáneos y fallas reproductivas ocurridos en la zona en los meses posteriores a la explosión, aunque hay datos indirectos de que los hubo un gran número.

En las pocas muestras de la zona que se analizaron tiempo después en Estados Unidos, por iniciativa de la Dirección General de Salud Ambiental de la SSAse encontró una elevadísima contaminación por dioxinas, sustancias de alta persistencia y gran peligrosidad. Sin embargo, estos análisis no se han repetido, ni se ha evaluado la presencia de estas sustancias en los afectados o en muestras de agua de los arroyos y pozos.

Tampoco hubo un estudio exhaustivo que permitiera identificar las causas del accidente (recientes y lejanas, estructurales y coyunturales) ni registrar y evaluar las deficiencias de información, capacitación, organización y operación que contribuyeron a que se produjera y a que su control fuera tan deficiente, lo que impidió que las autoridades de todos los niveles aprendieran algo sobre cómo se generan estas emergencias, cómo se pueden evitar y como se deben manejar y controlar.

A pesar de tantas y tan notorias deficiencias, al parecer las autoridades federales y estatales de salud y ambiente siguen creyendo que el sol se puede tapar con un dedo; que no hubo afectados en este accidente; que, con declarar que no ha habido problemas posteriores, ya no los hay, y que, con ignorar al asunto y los afectados, desaparecerán de manera automática sus quejas y sus necesidades. Pero la realidad es muy terca y, por mucho esfuerzo que se ponga en ignorarla, no sólo no desaparece, sino que, en casos como éste, los problemas se agravan y se complican.

Aunque es bien sabido que prevenir que estas emergencias ocurran y planear para enfrentarlas con éxito no es complicado y sólo requiere voluntad política, es de lamentarse que, en lugar de tomar medidas insuficientes e inadecuadas como ocurrió en un principio y, después, hacer todo lo posible porque el caso se olvidara, las diversas autoridades no hayan aprovechado esta situación para modificar la forma de enfrentar estas emergencias, lo cual debe empezar por informar a la población y a los cuerpos de rescate sobre las actividades y riesgos de las industrias locales, capacitar a los bomberos y los grupos de primeros auxilios y dotarlos de todo lo necesario para que, en un caso como éste lo sepan manejar y lo controlen de manera eficaz sin ponerse en riesgo ellos mismos.

Como resultado, en los 23 años transcurridos no ha habido una mejoría en ninguno de estos rubros, no sólo en Córdoba, sino el estado y en el país, y las medidas de protección civil, la preparación y equipamiento de los cuerpos de bomberos, la vigilancia y control de las empresas riesgosas y, en general, los mecanismos de prevención y respuesta a estos casos, siguen más o menos como estaban y, hablando de Veracruz, son definitivamente insuficientes en relación con las crecientes necesidades del estado.

Debería preocuparnos que, según las evidencias, las autoridades estatales de salud, ambiente y protección civil crean que en un estado tan industrializado como Veracruz, los desastres sólo pueden ser naturales y se resuelven donando a los afectados láminas o colchonetas y pidiendo el apoyo del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuando, según datos oficiales, es uno de los estados en que ocurren más emergencias químicas. Peor aún será que se requiera una nueva de estas emergencias para que salgan de su error.

En realidad, mientras no haya los cambios que ya eran urgentes hace 23 años y mientras estos accidentes se sigan tratando con pinzas –‘*para que no se politicen’*- o resolviéndolos a golpe de boletines, en la próxima emergencia química grave de Veracruz veremos lo mismo que se vió en Córdoba: una comunidad aterrorizada e inerme ante el desastre, autoridades estatales y federales impreparadas, descoordinadas y totalmente rebasadas; medidas de control insuficientes, tardías y erróneas, consecuencias posteriores ignoradas y afectados desantendidos, mientras, con la complacencia oficial y, a veces, con su colusión, los empresarios siguen desprotegiendo a las comunidades en donde ubican sus plantas.

Desde luego, las emergencias químicas van a seguir surgiendo en Veracruz y en México pero, si la respuesta y el control de la emergencia son similares a lo que ocurrió en Anaversa, si se repite el patrón de desatención oficial hacia los afectados, si se sigue creyendo que atender las consecuencias de una emergencia química es cuestión de sembrar *‘a posteriori’* pastito y florecitas en el sitio del desastre o, como propuso no hace tanto el alcalde de Córdoba, dedicar el muy contaminado predio en donde estuvo esta planta a mercado para “resolver” el problema de los ambulantes, las consecuencias pueden ser gravísimas.